

GACETA DE PUERTO-RICO.

SE PUBLICA

Todos los Mártes, Juéves y Sábados.



SE SUSCRIBE

En la Imprenta de Gonzalez. Fortaleza 15.

PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO.

AÑO 1870.

SABADO 5 DE FEBRERO

NUM. 16.

PARTE OFICIAL.

Dirección de Administración local
DEL GOBIERNO SUPERIOR CIVIL
DE LA ISLA DE PUERTO-RICO.

Por el Ministerio de Ultramar se ha comunicado al Excmo. Sr. Gobernador Superior Civil de esta Isla, el decreto siguiente:

“Excmo. Sr.:—Para la plaza de Jefe de Negociado de tercera clase, vacante en la Secretaría de ese Gobierno Superior Civil, por cesantía de Don Luis Martí y Caballero, dotada con el sueldo anual de mil seiscientos escudos y otros mil seiscientos de sobresueldo; S. A. el Regente del Reino ha tenido á bien nombrar á D. Rafael Alonzo Ibañez, Oficial 1.º Contador en la Administración de la Aduana de esa Capital. De orden de S. A. lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos correspondientes.”

Lo que por disposición de S. E. se publica en el periódico oficial, para conocimiento general. Puerto-Rico 31 de Enero de 1870.—*Cárlos de Rojas.*

Habiendo regresado de su viaje á Europa el Vice-Cónsul de Portugal, Don Francisco Baston, el Excmo. Sr. Gobernador Superior Civil, se ha servido disponer se haga cargo de dicho Vice-Cónsulado, cesando en su consecuencia Don Bartolomé Borrás, que lo desempeñaba interinamente.

Lo que por disposición de S. E. se publica en este periódico oficial, para conocimiento general. Puerto-Rico 31 de Enero de 1870.—*Cárlos de Rojas.*

El Excmo. Sr. Gobernador Superior Civil, por resolución de esta fecha, se ha servido expedir el decreto siguiente:

“Se declara cesante al Alcalde de Juncos Don Juan Campos, Capitán de Infantería, y se nombra en su lugar al que lo es de Trujillo-alto, Don José Antonio Gimeno.

Vacante la Alcaldía del pueblo de Trujillo alto por traslación del que la servía, se nombra para desempeñarla en propiedad al que lo es de la Carolina, Don Emiliano Diaz.

Vacante la Alcaldía del pueblo de la Carolina por traslación del que la servía, se nombra para desempeñarla en propiedad al que lo es del pueblo de Sabana-grande, Don Enrique Gomez Gimenez.

Vacante la Alcaldía del pueblo de Sabana-grande por traslación del que la servía, se nombra para desempeñarla en propiedad al Secretario del Corregimiento de Aguadilla, Don Sebastian del Valle.

Vacante la Secretaría del Corregimiento de Aguadilla por ascenso del que la desempeñaba, se nombra para servirla en propiedad á Don Manuel Gonzalez, cesante del mismo destino y empleado que ha sido de este Gobierno Superior Civil.

Lo que por disposición de S. E. se publica en el periódico oficial, para conocimiento general. Puerto-Rico 1.º de Febrero de 1870.—*Cárlos de Rojas.*

GOBIERNO SUPERIOR CIVIL

DE LA ISLA DE PUERTO-RICO.

Dirección de Administración local.

Por el correo de España llegado á esta Capital el 30 del corriente mes, se recibieron el Decreto de S. A. el Regente del Reino y la Circular del Excmo. Sr. Ministro de Ultramar, que se insertan á continuación:

DÉCRETO.

Resultando una vacante de Diputado á Cortés por la tercera circunscripción electoral de la Isla de Puerto-Rico,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Se convoca á los colegios electorales de la tercera circunscripción de la Isla de Puerto-Rico, para que procedan á la elección parcial del Diputado á Cortés Constituyentes que debe representarla.

Art. 2.º La elección dará principio el día 25 de Febrero próximo, y se verificará en la forma dispuesta para las generales con arreglo al decreto de 14 de Diciembre de 1868 y al reglamento para su ejecución dictado en 27 de Enero último, por el Gobernador Superior Civil de la expresada provincia.

Art. 3.º El Gobernador Superior Civil, adoptará las medidas que correspondan para el cumplimiento del presente decreto.

Dado en Madrid á once de Enero de mil ochocientos setenta.—*Francisco Serrano.*—El Ministro de Ultramar, *Manuel Becerra.*

MINISTERIO DE ULTRAMAR.

ORDEN.

Excmo. Sr.: En cumplimiento de la ley que autoriza la elección de Diputados á Cortés donde resulten vacantes, S. A. el Regente del Reino se ha servido convocar los colegios electorales de la tercera circunscripción de esa provincia en que debe elegirse un Diputado. Por segunda vez, desde el mal aventurado suceso de 1836, la Isla de Puerto-Rico ejercerá el derecho político por excelencia, el que determina y define el concurso activo de los ciudadanos en la obra suprema de constitución y organización del Estado, de intervención y censura de los actos del Poder Ejecutivo. Pues por ser estas las consecuencias legítimas del derecho de sufragio, su ejercicio dentro de los límites legales, debe ser libérrimo y eficazmente garantido. La ley, ponga ó no restricciones á aquel, desde el momento en que lo admite y declara, cualquiera que sea su extensión, supone necesariamente en el elector el perfecto conocimiento de lo que debe hacer, y por lo mismo veda todo acto directo ó indirecto que pueda encaminar su voluntad á una determinación que ni piensa ni quiere. Semejante coacción moral, ó de cualquier género que fuere, siempre censurable en los particulares; como tal coacción, cuando se trata del Poder y de sus delegados, es ciertamente punible ó inominosa. Llámese influencia moral, llámese de otro modo, toda intervención de la Autoridad y sus agentes que no tenga por objeto garantizar la libertad del sufragio y facilitar su ejercicio á quienes la ley reconoce el derecho de votar, es un atentado imperdonable, y en valde el quererlo coonestar con salvadades falaces, ora invocando el orden público, ora el cumplimiento de la ley. Desgraciadamente la experiencia acredita que casi todas las cuestiones llamadas de orden público, en los momentos electorales reconocen por causa, no las coacciones particulares, que para reprimirlas basta y sobra la Autoridad judicial, porque si se producen son delitos comunes, sino las coacciones del poder ó sus agentes, que con el objeto de patrocinar esta ó la otra persona afectan á aquel. El Gobierno de S. A. no admite, no puede admitir, porque es honrado, tan peligrosa doctrina y tan condenables medios. Si su conducta es patriótica y buena, sabe bien que, aparte excepciones inevitables y extremas, la opinión sana y liberal con él está; y los delegados que envíe á las Cortés serán apoyos, tanto mas firmes, cuanto mas desinteresados y espontáneos. Si por el contrario, la marcha que sigue no es conducente al bien público, ni se funda en la justicia, ni se inspira en la libertad, justo y necesario es tambien que la opinión le advierta, aconseje y censure para que enderece sus pasos hácia el buen camino. Por lo mismo desea y quiere firmemente

la mas completa libertad en esa manifestación y en el acto mas propio para serla, que es el de la emisión del voto.

Esta es, pues, la primera é invariable regla á que V. E. deberá ajustar su conducta en la próxima elección que debe verificarse en esa provincia. Libre la manifestación de todos; libres los actos de todos dentro de la ley.

Siempre el derecho de sufragio, aun admitido con la extensión que la Constitución del Estado lo declaró para la Península, tiene ciertas restricciones originadas en la incapacidad natural ó legal de los electores. Cuando el sufragio es restringido aquellas incapacidades aumentan necesariamente; pero ni en uno ni en otro caso quiere decir que á las restricciones de la ley, y fundándose en interpretaciones farisáticas ó arbitrarias, deben agregarse otras á gusto y capricho de la Autoridad. Todo al contrario: por lo mismo que el derecho de sufragio, como derecho de todos, tiende á universalizarse allí donde es limitado, cuando ocurren dudas sobre su existencia, sobre la aptitud de tal ó cual individuo, la interpretación no debe ser restringida, sino amplia; que vale más la admisión de algunos votos dudosos que la privación de uno que no lo sea; lo primero podrá considerarse una anticipación del derecho; lo segundo es siempre violación del mismo. En conformidad con estas indicaciones, cuidará V. E. de prevenir eficazmente á todas las Autoridades y á cuantos deban intervenir en este asunto que ajusten su conducta á los principios enunciados, y eviten con cuidadoso esmero esas interpretaciones forzadas y arbitrarias, que se encaminan siempre á la privación del derecho de sufragio y á escatimar el ejercicio de tan preciosa facultad.

Todavía la Autoridad pudiera hacer uso de ciertos medios, aunque indirectos, de igual ó idéntica gravedad que los anteriormente denunciados y de efectos tal vez mas seguros. Los apremios, las comisiones, las penas administrativas y discrecionales, el acceso á los departamentos de Gobierno para obtener el logro repentino de pretensiones injustas, las promesas de protección, y otros mil resortes que se ocultan bajo el inofensivo mote de la acción administrativa, y son, sin embargo, sombríos recuerdos de la burocracia espirante. Sobre este punto capital debe fijar V. E. muy preferentemente su atención, y allí donde note el mas pequeño abuso, corregirlo instantánea y duramente sin contemplación alguna. No es posible que aun la tentativa de ese abuso se deje prosperar; sería el germen de futura corrupción ó injusticia, y es preciso ahogarlo en los primeros anuncios. Que si el cuerpo electoral se acostumbra á ver en la administración, no la directora de su opinión, sino la garantía eficaz de la libertad para emitirla, estos primeros momentos de vida pública serán invocados siempre con religioso respeto, y servirán de ejemplo y estímulo para aquellos á quienes consideraciones del momento han privado del derecho de sufragio. Los pueblos se educan en el respeto y cumplimiento de la ley por gobernantes y gobernados; pero allí donde los primeros rompen los diques de la legalidad, los segundos se aprestan á la habitual y desorganizadora inobediencia.

Tampoco puede olvidarse que la facilidad para emitir el sufragio mediante la multiplicación de puntos en que el acto de la elección se verifique, es otra condición, exterior sí, pero de notoria importancia. En este punto el Decreto de 14 de Diciembre de 1868, que ya es ley, ha de ser religiosamente cumplido, y V. E. de seguro pondrá los medios necesarios para que sus disposiciones tengan efecto sin menoscabo alguno.

Por último, la garantía eficaz de toda ley política, y sobre todo de los derechos que consagra y su ejercicio, es la publicidad. La ley de la península estima grandemente esta condición; y pues que el artículo 25 de la que rige en Puerto-Rico permite la mayor latitud sobre este extremo, V. E. debe fijar su atención en aquel y procurar que sea un hecho en todos los colegios sin limitación de ningún género.

Lo que de orden de S. A. comunico á V. E. para su puntual cumplimiento; encargándole asimismo que disponga la publicación de este orden en la Gaceta de la Isla y en los periódicos de la circunscripción, si los hubiere.—Dios guarde á

V. E. muchos años.—Madrid 12 de Enero de 1860.—*BECCERRA.*

Sr. Gobernador Superior Civil de la Isla de Puerto-Rico.

Y puesto el cúmplase por el Excmo. Sr. Gobernador Superior Civil, en el mismo día 30 del corriente mes, se publican ambos documentos, para conocimiento general y su mas exacto cumplimiento por quienes corresponde. Puerto Rico 2 de Febrero de 1870.—*Cárlos de Rojas.* 2

Por disposición del Excmo. Sr. Gobernador Superior Civil, y para conocimiento general de los habitantes de esta Isla y con especialidad de los de la 3.ª circunscripción electoral, se publican á continuación el Capítulo 5.º de la Ley de 9 de Noviembre de 1868, que comprende la sanción penal por delitos electorales, y el decreto de este Gobierno de provincia de 28 de Enero de 1869, sobre el ejercicio del derecho electoral. Puerto-Rico 2 de Febrero de 1870.—*Cárlos de Rojas.*

CAPITULO 5.º

DE LA SANCION PENAL.

Ley de 9 de Noviembre de 1868.

121. Toda falsedad cometida en el padron, en las cédulas de vecindad, ó en otro documento público, por cualquier funcionario con el fin de dar ó quitar el derecho electoral indebidamente, será castigado con arreglo á las disposiciones de la sección primera del capítulo 4.º, título 4.º del Código penal.

122. En el mismo caso estarán los que aplicaren indebidamente votos á favor de un candidato ó candidatos para secretarios escrutadores, para concejales ó para diputados provinciales ó á Cortés.

123. Serán castigados con la pena de inhabilitación perpétua especial para el cargo respectivo, inhabilitación absoluta perpétua para ejercer derechos políticos y multa de 20 á 200 duros, los funcionarios públicos de cualquiera clase ó categoría que obligasen á un elector á dar su voto ó impidieren que lo diere de los modos siguientes:

1.º Haciendo salir de su domicilio ó permanecer fuera de él á un elector en los días de elecciones, ó impidiéndole con cualquier otra vejación al ejercicio de su derecho electoral.

2.º Conduciendo por medio de agentes públicos de la autoridad civil, militar ó eclesiástica á los electores para que emitan sus votos.

3.º Imponiendo con promesas ó amenazas á sujetos determinados, designándolos como los únicos que deben ser elegidos.

124. Incurrirán en la pena de suspensión, multa de 10 á 100 duros ó inhabilitación perpétua especial para ejercer derechos políticos.

1.º El presidente de la mesa que maliciosamente deje de nombrar secretarios para la mesa interina á los individuos de mayor ó menor edad con arreglo á lo prevenido en el artículo 31 de este decreto.

2.º El presidente de la mesa que claramente negare ó indirectamente impidiere á los electores usar el derecho que les concede el párrafo 2.º del artículo 39 de este decreto.

3.º El que á sabiendas y con manifiesta mala fé alterase la hora en que deben comenzar ó concluir las elecciones.

4.º La autoridad que obligue á sus dependientes á que hagan á sus electores reco-